

Este documento contiene jurisprudencia, selección artículos de la Ley del Seguro Social y Nota periodística.

JURISPRUDENCIA 2a./J. 85/2010

TESIS PENDIENTE DE PUBLICARSE

SEGURO SOCIAL. EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN, BASE PARA CUANTIFICAR LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, TIENE COMO LÍMITE SUPERIOR EL EQUIVALENTE A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, ACORDE CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997.

De los artículos 136, 142, 147 y 167 de la referida Ley, deriva que el salario diario que sirve de base para determinar la cuantía básica de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, es el que corresponde al promedio de las últimas 250 semanas de cotización. Por otra parte, el numeral 33 de la misma legislación establece como límite superior al salario base de cotización el equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente que rija en el Distrito Federal, excepto para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, que tendrán como límite superior el correspondiente a 10 veces el referido salario; en el entendido de que aquel límite rige para los seguros de enfermedad general y maternidad. Así, cada rama de aseguramiento tiene autonomía financiera y los recursos no pueden sufragar ramas distintas, de manera que los generados para los seguros de enfermedad general y maternidad serán encauzados para ampliar su cobertura, aumentar la eficacia de los servicios médicos y continuar con la reposición y modernización del equipo, mientras que los de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte serán canalizados para financiar el otorgamiento de las pensiones respectivas, de ahí que el límite previsto a este último debe aplicarse al salario promedio de las 250 semanas de cotización, que sirve de base para cuantificar las pensiones correspondientes.

Contradicción de tesis 143/2010.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Tercer y Décimo Segundo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.- 26 de mayo de 2010.- Cinco votos.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de junio del dos mil diez.

LEY DEL SEGURO SOCIAL 1997

Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva.

Artículo 33.- de la ley del seguro social publicada el 3 de diciembre de 1973

Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva, salvo lo dispuesto en la fracción III del **Artículo 35.**

Tratándose de seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal."

Artículo 33. Para el disfrute de las prestaciones en dinero, en caso que el asegurado preste servicios a varios patrones se tomará en cuenta la suma de los salarios percibidos en los distintos empleos, cuando ésta sea menor al límite superior establecido en el artículo 28 los patrones cubrirán separadamente los aportes a que estén obligados con base en el salario que cada uno de ellos pague al asegurado.

Artículo 136. El derecho al goce de la pensión de orfandad comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando éste haya alcanzado los dieciséis años de edad, o una edad mayor, de acuerdo con las disposiciones de los dos artículos anteriores.

Con la última mensualidad se otorgará al huérfano un pago finiquito equivalente a tres mensualidades de su pensión.

Artículo 141. La cuantía de la pensión por invalidez será igual a una cuantía básica del treinta y cinco por ciento del promedio de los salarios correspondientes a las últimas quinientas semanas de

cotización anteriores al otorgamiento de la misma, actualizadas conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, más las asignaciones familiares y ayudas asistenciales.

En el caso de que la cuantía de la pensión sea inferior a la pensión garantizada, el Estado aportará la diferencia a fin de que el trabajador pueda adquirir una pensión vitalicia.

En ningún caso la pensión de invalidez, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales, podrá ser inferior a la pensión garantizada establecida en el artículo 170 de esta Ley.

Artículo 142. El monto determinado conforme al artículo anterior, servirá de base para calcular las pensiones que se deriven de la muerte tanto del pensionado, como del asegurado, al igual que para fijar la cuantía del aguinaldo anual.

En todo caso, el monto del aguinaldo a que se refiere el párrafo anterior, no será inferior a treinta días.

Artículo 147. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para el seguro de invalidez y vida el uno punto setenta y cinco por ciento y el cero punto seiscientos veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente.

Artículo 167. Los patrones y el Gobierno Federal, en la parte que les corresponde están obligados a enterar al Instituto el importe de las cuotas obrero patronales y la aportación estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Puñalada a la jubilación

Se sustenta en artículo derogado de la Ley del Seguro Social

Ilegal, la jurisprudencia de la Corte sobre pensiones de jubilados: ANAD

Alfredo Méndez y Patricia Muñoz

Periódico La Jornada

<http://www.jornada.unam.mx/2010/07/23/index.php?section=politica&article=003n1pol>

Viernes 23 de julio de 2010, p. 3

Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), sostuvo que la jurisprudencia aprobada el pasado 9 de junio por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que borra derechos en materia de pensiones de un millón 200 mil trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es ilegal porque se sustentó en el contenido del artículo 33 de la Ley del Seguro Social, el cual fue derogado en 1997.

Para Miguel Alonso Raya, ex presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, la jurisprudencia es un subterfugio jurídico que se pone en marcha para resolver el problema del costo de las pensiones al IMSS. La

resolución, sostuvo, está fuera de la legalidad y demuestra que las reformas aprobadas a la Ley del Seguro Social no solucionaron el problema financiero del instituto, sólo afectaron los derechos de los trabajadores en vano.

Experto en el tema, el ex diputado indicó que la ley de 1995, publicada en 1997, en el 25 transitorio establece que el tope de cotización para las pensiones es de hasta 25 salarios mínimos, por lo que la jurisprudencia de la Corte no tiene base legal de la cual sostenerse. Hacen esto para bajar el costo y resolver el problema de las pensiones al Seguro Social y solucionar el problema a la Secretaría de Hacienda.

Fuentes Muñoz consideró que los cinco ministros de la segunda sala incurrieron en responsabilidades administrativas y penales. Aseguró que tomaron una actitud dolosa en perjuicio de más de un millón de trabajadores, pues aprobaron una jurisprudencia que fija pensiones con un tope máximo de 10 sueldos mínimos en lugar de un pago límite de 25 minisalarios, como establece el artículo 28 de la Ley del Seguro Social –vigente desde hace más de una década–, valiéndose de una legislación del IMSS de 1973, que fue derogada el primero de julio de 1997.

Añadió que al emitir la jurisprudencia 85/2010, los ministros violentaron el artículo 225 del Código Penal Federal, por lo que deben ser denunciados ante la Procuraduría General de la República y sometidos a juicio de procedencia (en la Cámara de Diputados).

Según Fuentes Muñoz, la jurisprudencia de ninguna forma modifica la Ley del IMSS vigente desde 1997, y tampoco puede tener un efecto retroactivo que afecte a los trabajadores que ya gozan de la pensión hasta por un límite de 25 salarios mínimos, pues las jurisprudencias sólo son obligatorias para los tribunales colegiados y juzgados de distrito en el ámbito del Poder Judicial, cuando el asunto cae en ese lugar por motivo de algún litigio.

En 1973, el artículo 33 de la Ley del Seguro Social establecía que “los asegurados se inscribirán con el sueldo base de cotización que perciban al momento de afiliarse, estableciéndose como límite superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.

Tratándose de seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, ordenaba la norma.

El artículo 33 fue derogado cuando entraron en vigor reformas a la Ley del IMSS. Desde ese día, los preceptos del anterior artículo 33 de esa legislación se concentraron en el artículo 28 de la norma reformada (vigente) que dice: Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rija en el DF y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva.

Alonso Raya indicó que la Corte está contraviniendo incluso una ley que ellos mismos avalaron, cuando se hizo la reforma al IMSS, por lo que no tienen elementos para desconocer lo que la norma establece.

Es una maniobra de la Corte para hacerle el trabajo sucio a Hacienda, que es la que debe pagar el costo de las pensiones.